



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

29ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN ORDINARIA — 21 DE MAYO DE 1997

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF,  
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM  
y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor PEDRO G. VILLARROEL

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB  
y señor RODOLFO N. ADEN

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando V.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GALVÁN, Raúl A.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENECHINI, Javier Reynaldo

MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
OUDIN, Ernesto R.  
OYARZÚN, Juan C.  
PARDO, Angel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José M.  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLASVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES. CON AVISO:

CAFIERO, Antonio F.  
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela  
MOREAU, Leopoldo R. G.

### EN COMISION:

BAUM, Daniel

### POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

92. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Romero Feris y Aguirre Lanari por el que se solicita se declare zona de emergencia a diversas localidades de la provincia de Corrientes, debido a las inundaciones provocadas por el río Paraná (S.-2.770/96). Se aprueba. (Pág. 2352.)
93. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Martínez Almudevar por el que se solicita un subsidio para la Federación Argentina de Enfermería (S.-2.667/96). Se aprueba. (Pág. 2353.)
94. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora la instrucción sumaria como título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación (C.D.-91/96). (Pág. 2354.)
95. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora al título II del libro III del Código Procesal Penal el juicio abreviado (C.D.-90/96). Se aprueba. (Pág. 2359.)
96. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto 94 de este sumario (C.D.-91/96). Se aprueba. (Pág. 2360.)
97. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca de los aspectos técnicos y económico-financieros de los llamados a licitación para trabajos de reparación en rutas nacionales (S.-2.684/96). Se aprueba. (Pág. 2361.)
98. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación de los señores senadores Maya y Alasino por el que se solicita se realice la obra denominada Puente sobre arroyo Antónico-Calle Libertad al final en la ciudad de Paraná, Entre Ríos (S.-1.875/96). Se aprueba. (Pág. 2362.)
99. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador López por el que se solicitan informes acerca de la reparación del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo (S.-2.765/96). Se aprueba. (Pág. 2363.)
100. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Maranguello por el que se solicita se instrumenten las medidas correspondientes para otorgar mayor seguridad al tránsito vehicular y peatonal en la ruta nacional 7, en la circunvalación de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis (S.-2.853/96). Se aprueba. (Pág. 2364.)
101. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann por el que se solicita la pavimentación del acceso a la localidad de Theobald desde la autopista Aramburu, ruta nacional 9, Santa Fe (S.-2.861/96). Se aprueba. (Pág. 2365.)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en un proyecto de resolución y dos de comunicación: el primero, de la señora senadora Rivas; el segundo, del señor senador Losada; y el tercero, del señor senador Tell, por los que se expresa preocupación ante la depredación de la selva virgen misionera (S.-371, 373 y 508/97). Se aprueba otro proyecto de resolución. (Pág. 2365.)
103. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Villaverde por el que declara de interés legislativo la I Jornada Bonaerense de Bioética, a desarrollarse en Mar del Plata, Buenos Aires. (S.-275/97). Se aprueba un proyecto de resolución. (Pág. 2367.)
104. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Hídricos y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de los señores senadores Mac Karthy y Sala por el que se solicita se disponga la investigación de posibles trabajos no autorizados de desvío de las nacientes del río Chubut en la zona de Norquínco (S.-2.884/96). Se aprueba. (Pág. 2368.)
105. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Hídricos y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo acerca de los proyectos para resguardo del ecosistema de la cuenca del río Bermejo (S.-2.287/96). Se aprueba. (Pág. 2369.)
106. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Hídricos y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicita colaboración al Poder Ejecutivo para atenuar la contaminación del río Salado en el tramo Rafaela-Santo Tomé (S.-2.286/96). Se aprueba. (Pág. 2370.)
107. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del señor senador Zalazar sobre presunción de ingresos a los efectos del impuesto a las ganancias (S.-1.872/96). Se aprueba un proyecto de resolución. (Pág. 2371.)
108. Moción formulada por el señor senador Genoud para que el dictamen en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al

que un subsidio a la Federación Argentina de Enfermería (personería jurídica 1.978), con domicilio en avenida Rivadavia 3518 (1204) de esta Capital Federal, con destino a la adquisición de un inmueble para el funcionamiento de su sede institucional.

*Enrique Martínez Almudevar.*

### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Federación Argentina de Enfermería es una entidad civil sin fines de lucro, con más de treinta años de vida institucional, que nuclea a las asociaciones de enfermería de todas las provincias, con el fin de promover el desarrollo de esta profesión, no sólo en el ámbito del ejercicio de la actividad, sino además en el de la educación. De este modo contribuye de manera permanente al mejoramiento de la calidad de los servicios de enfermería en todo el país y al perfeccionamiento de la enseñanza de profesionales y auxiliares de la especialidad.

Al mismo tiempo esta federación representa a la enfermería argentina en nuestro país y fuera de él, siendo miembro natural de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), y del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). En este ámbito internacional, desde julio de 1994, integra la Comisión Regional de Enfermería en el Mercosur, junto a sus similares representantes de los demás países signatarios del Tratado de Asunción.

En los últimos años, podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos, somos testigo de un avance que, dejando de lado la mera actividad de colaboración del médico, se ha insertado en la discusión de los temas sociales con un verdadero criterio profesional. La sanción de la ley 24.004 es el fruto de este crecimiento silencioso, pero perceptible.

Este crecimiento conlleva la necesidad de contar con los medios adecuados para poder realizar la tarea cada vez más compleja. Y entre estos medios resulta de especial importancia la adquisición de la sede propia. Creemos que es una propuesta que no supera las posibilidades del Poder Ejecutivo, a pesar de las restricciones que se imponen. Por ese motivo, sin pretender sobreabundar en razones y fundamentos, solicito de mis pares el voto favorable para el presente proyecto de comunicación.

*Enrique Martínez Almudevar.*

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

94

### INSTRUCCION SUMARIA EN EL CODIGO PROCESAL PENAL

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora la instrucción sumaria como título IX de libro II del Código Procesal Penal de la Nación. (Orden del Día N° 301.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-91/96) incorporando la instrucción sumaria como título IX del libro II del Código Procesal Penal de la Nación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de abril de 1997.

*Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Agúndez.  
— Augusto Alastino. — Ernesto R. Oudin.  
— Cristina E. Fernández de Kirchner. —  
Angel F. Pardo. — Raúl A. Galván. —  
José Genoud.*

En disidencia parcial:

*Pedro G. Villarreal.*

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(23 de octubre de 1996)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º — Incorporase como título IX del libro II del Código Procesal de la Nación, el siguiente título:

### TITULO IX

#### Instrucción sumaria

Artículo 353 bis: Cuando una persona haya sido sorprendida en flagrancia de un delito de acción pública, y el juez considerare prima facie que no procederá la prisión preventiva del imputado, la investigación quedará directamente a cargo del

agente fiscal, quien actuará con las facultades previstas en el libro II, sección II.

En la primera oportunidad el agente fiscal le hará conocer al imputado cuál es el hecho que se le atribuye y cuáles son las pruebas existentes en su contra, y lo invitará a elegir defensor.

El imputado podrá presentarse ante el fiscal con su abogado defensor, aun por escrito, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.

La instrucción del agente fiscal no podrá extenderse por un plazo superior a los quince (15) días.

El imputado podrá solicitar al juez ser oído en declaración indagatoria. En tal caso la instrucción se registrará por las normas comunes.

Artículo 353 ter: Reunidos los elementos probatorios respecto de los extremos de la imputación penal, el agente fiscal correrá vista al querellante, si lo hubiere, luego de lo cual se expedirá en los términos del inciso 2º del artículo 347.

El juicio tramitará conforme las reglas del libro III que correspondan al caso. También podrá tramitar según las reglas del juicio abreviado.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.  
Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.

#### ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por los señores diputados Aramburu y Cafferata Nores.

#### FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR PEDRO GUILLERMO VILLARROEL

Señor presidente:

Si bien juzgo conveniente la asignación de la investigación preliminar al ministerio público, creo necesario advertir los peligros de sumar la instrucción sumaria, de plazos brevísimos, con la posibilidad de realización del juicio abreviado, tema sobre el cual me he expedido en el lugar correspondiente. El afán por garantizar la celeridad del procedimiento, a través de la creación de mecanismos destinados a aliviar la sobrecarga judicial, debe tener como límite la debida garantía del derecho de defensa en juicio. El encadenamiento de la instrucción sumaria con el juicio abreviado crea un marco desfavorable para la salvaguarda del ejercicio de dicho derecho. Es por ello que recomiendo la eliminación del artículo 353 ter, segundo párrafo, última oración.

Pedro G. Villarroel.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis, bloque justicialista.

Sr. Quinzio. — Señor presidente, señores senadores: el presente proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación venido en revisión apunta a dar solución práctica tanto a la necesidad de acelerar el trámite procesal como el ahorro de recursos y de actividad judicial en casos de delitos conminados con menor penalidad.

Sobre esta idea se proyecta la supresión de la etapa del juicio en los casos en que, concluida la instrucción preparatoria, el agente fiscal estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a los seis años de prisión, o de una no privativa de la libertad aun procedente en forma conjunta con aquella.

Para que sea admisible este trámite debe mediar la conformidad del imputado asistido por su defensor sobre la existencia de los hechos y la participación de aquél, decriptas en el requerimiento de elevación a juicio y en la calificación legal recaída.

El juez debe elevar la solicitud y la conformidad prestada al Tribunal de juicio el cual, previo conocimiento *de visu* del acusado y de escucharlo, si quisiera hacer alguna manifestación, ha de decidir si acepta o rechaza la solicitud debiendo, en este último supuesto, continuar el proceso sin que ulteriormente tenga relevancia el acuerdo desestimado.

La propuesta tiene antecedentes en algunas instituciones del Código Procesal Penal de la República Italiana y, en nuestro medio, en el Código Procesal de Córdoba y el recientemente sancionado Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. El de Córdoba fue sancionado en 1992 y en esta provincia las estadísticas marcan que aproximadamente un 40 por ciento de causas concluyen mediante su aplicación sin que, por lo demás, los tribunales cuestionaran su legalidad.

Esto último debe ser destacado porque se han alzado algunas voces observando cierta similitud con la *plea bargaining* americana, instituto esencialmente ajeno a nuestra tradición jurídica entroncada con el derecho continental europeo.

En el mencionado sistema americano, el acuerdo entre las partes se estructura sobre la base de la disponibilidad del objeto del proceso, de forma tal que el decisorio tiene apoyatura en una verdad consensuada con todas las consecuencias que ello implica, como ser la confesión negociada de un delito menor a cambio de evitar el riesgo de una pena mayor en caso de afrontar el juicio.

Ese sistema no tendría cabida en nuestro ordenamiento legal. Resultaría francamente inconstitucional por atentatorio de la garantía del debido proceso, traducido en que toda sentencia condenatoria debe fundarse en un juicio previo respetando la inviolabilidad del ejercicio del derecho de defensa y con el cargo probatorio del Estado como presupuesto del quebrantamiento del estado de inocencia.

En el proyecto en consideración el acuerdo tan sólo se limita a la individualización de la pena. No permite la disponibilidad del objeto del proceso por lo que no se aparta de los principios de legalidad y de verdad real.

Tanto es así que el tribunal debe fundar las sentencias en las piezas del sumario, es decir, sin apartarse de lo que ha sido materia de investigación. Por lo demás, el acuerdo no obliga al Tribunal. Debe revisarlo y decidir si lo acepta o no.

La única limitación que tiene es en cuanto al monto de la pena acordada, pero puede no aceptarla y remitir la causa a otro Tribunal para la prosecución del juicio.

Si bien la disidencia formulada por el señor senador por Catamarca se respalda en abundante doctrina nacional y extranjera sobre el particular, creemos que sus observaciones resultan suficientemente rebatidas con los fundamentos dados por el diputado Cafferata Nones, autor del proyecto, cuando expresa que en este juicio abreviado necesariamente deberá alcanzarse la verdad real y no una mera verdad jurídica o procesal. Destacando que la sentencia debe fundarse en las pruebas obtenidas durante la instrucción, "...y no en la confesión que pudiera haber prestado el acusado, en el marco del acuerdo, confesión que deberá ser verosímil y concordante con aquellas probanzas, lo que ratificará su valor conviccional. Sólo en estas condiciones puede imaginarse que el Tribunal, el Ministerio Público Fiscal y el defensor del imputado acuerden responsablemente omitir la recepción en juicio oral y público de las pruebas tendientes a acreditar la culpabilidad del confesante..."

De todos modos no podemos dejar de reconocer que significa un apartamiento de la oralidad como sistema más adecuado de política procesal. El ideal sería que todos los procesos tramitaran con arreglo a ese sistema recientemente incorporado al ámbito federal. Pero ocurre, y esta también es una cuestión de política procesal, que hay que dar una alternativa que permita —como lo he señalado al co-

mienzo— el logro de un considerable número de sentencias en plazos cortos, con un significativo ahorro de recursos y actividad judicial para el caso de delitos menos graves y sin que se afecten esenciales garantías constitucionales.

Por todo ello solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente, señores senadores: a través de las firmas que suscriben el dictamen de mayoría, es natural pensar que existe un consenso bastante amplio —que desde luego es muy respetable— respecto a estas modificaciones al Código Procesal Penal.

No obstante lo cual voy a fundar brevemente una moción de orden, remitiéndome a los fundamentos que ya están escritos en la disidencia y que constan en el dictamen y haré alguna consideración adicional de modo muy breve porque hace a las responsabilidades que me incumben como senador.

En primer lugar observo que la secuencia de los órdenes del día que se traen a consideración es absolutamente ilógica, porque el orden del día 301 da por supuesta —respecto del cual tengo una disidencia parcial— la aprobación del orden del día 302, es decir el posterior.

El 301 prevé que en los casos de instrucción fiscal reducida de quince días se pueda acudir al procedimiento abreviado. Lo lógico hubiera sido exactamente lo inverso, es decir que primero se tratara la factibilidad de incorporar esa figura del proceso abreviado y luego el otro proyecto.

Pero de todas maneras y respetando el criterio expuesto por la mayoría, debo decir que la disidencia no se funda sólo en alguna cita doctrinaria que está efectuada en el dictamen descrito sino también en otras doctrinas que, a propósito justamente de la modificación del Código Procesal de Córdoba que data de 1991, y que responde también a la inspiración del autor de este proyecto, aunque no es similar sino análogo, se han expuesto recientemente. Más allá de cuestiones semánticas, realmente el proyecto responde al modelo norteamericano que, traducido con cierta libertad o más o menos literalmente, quiere decir regateo de cargos. Pues me parece que a nadie se le escapará, sobre todo por la latitud con que está previsto, que cuando el fiscal llame al imputado y a su defensor —que generalmente será el defensor oficial, como suele ocurrir— el imputado se va a ver ante la disyuntiva de afrontar el juicio con la posibilidad de una pena mayor a los seis años o de formular esto

que, de modo bastante eufemístico, el proyecto de ley llama aceptación de esta requisitoria fiscal.

Es evidente que más allá de la buena voluntad del fiscal y de la rectitud de su desempeño, el imputado va a sentir su voluntad sujeta a cierto grado de coerción por el hecho simple de que se le avise que si no acepta la requisitoria fiscal con su descripción de los hechos y de la participación en ellos, lo que supone una imputación criminal, corre el riesgo de que su condena sea mayor.

En cambio, si acepta, como dice el proyecto de ley, no corre ese riesgo de pena mayor y eso pone en crisis un dato fundamental de toda declaración autoincriminatoria que es el carácter voluntario de esa aceptación.

Por eso, entre otras cosas, pienso que en esta cuestión también debió darse intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque hay garantías constitucionales involucradas. Y de igual modo a la Comisión de Derechos y Garantías. ¿Por qué? Porque puede ser plausible que se renuncie a la consecución de la verdad real —porque eso también ocurre según este proyecto de ley—, pero siempre y cuando esa renuncia a la consecución de la verdad real esté fundada en el respeto a las garantías individuales y en las limitaciones derivadas del respeto por la dignidad humana; vale decir en el tipo de razones que vedan, por ejemplo, la tortura.

Pero no es plausible que ese grado de renuncia a la verdad real y ese compromiso —no por implícito menos concreto— al carácter voluntario de la aceptación de la acusación fiscal obedezca simplemente a razones de economía de trabajo de los tribunales llamados a decidir el juicio.

Muriel Maier, autor de Derecho Procesal Penal, en su edición de 1996, refiriéndose a este procedimiento y, concretamente, a la forma en que ha sido incorporado en el Código Procesal de Córdoba, que no es exactamente la misma de este proyecto, dice que, en general, la intención es plausible, reconoce que es una tendencia del derecho universal que converge hasta esta simplificación, pero expone algunas objeciones que son atendibles y además circunscribe el campo de aplicación de esta forma abreviada, no de juicio —porque no hay juicio en definitiva sino procedimiento—, a que se trate de delitos de carácter leve, vale decir cuando el pedido fiscal de pena no exceda de los dos años o se trate de casos sencillos. En cambio, el límite de seis años que figura en el orden del día 302 comprende a figuras de cierta gravedad.

De manera que por estos fundamentos brevemente expuestos propongo, en primer lugar, como moción de orden, que los órdenes del día 301 y 302, que están ligados aunque al revés desde el punto de vista lógico, pasen a la Comisión de Asuntos Constitucionales y también a la de Derechos y Garantías.

En el caso de rechazo de esta moción de orden, desde luego dejo ratificada mi disidencia, aclarando que en el caso del orden del día 301 es una disidencia parcial que significa una supresión de una frase de la última oración de la norma proyectada.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Agúndez.** — El bloque de la Unión Cívica Radical va a apoyar la moción hecha por el presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.

En primer lugar, lo haremos porque cuando en 1993 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de juicio oral no se dijo que esa iniciativa por sí sola iba a solucionar los problemas de la justicia penal, sino que era necesario complementarla con una serie de institutos entre los que estaban el juicio abreviado, la instrucción sumaria, la suspensión del proceso a prueba y las penas alternativas.

Precisamente, por la demora del Poder Legislativo en sancionar ese tipo de institutos la justicia está atrasada y las cárceles superpobladas. Por ello, en aquel entonces la Unión Cívica Radical aprobó el proyecto de ley de juicio oral, pero haciendo la aclaración de que era necesario aprobar a la brevedad esos institutos que, desgraciadamente, no se sancionaron. Estas son algunas de las actuales deficiencias existentes en la justicia argentina.

Cabe acotar que esos institutos solucionarían dos problemas: por una parte, el atraso de la justicia y, por la otra, la superpoblación, el hacinamiento y la promiscuidad que se vive en las cárceles.

Con respecto a los órdenes del día 301 y 302 voy a brindar un fundamento común sobre ambos porque, en definitiva, tratan sobre la misma cuestión. A través de estas normas no se trataría de violar en algo la legalidad o impedir la búsqueda de la verdad, porque lo que se plantea es totalmente distinto al antecedente de los Estados Unidos. Hago esta afirmación porque, en primer término, el imputado, que será asistido por un defensor, deberá reconocer que la acusación es correcta; en segundo término, el Minis-

terio Fiscal tendrá que acordar con el imputado y su defensor la imposición de una pena, dentro de los topes mínimo y máximo previstos. O sea que se respetará la tipicidad del Derecho Penal. En tercer lugar, el tribunal que intervenga deberá homologar el acuerdo. Cabe señalar que en los Estados Unidos, este tipo de acuerdos son verdaderas transacciones en las que, incluso, se puede cambiar la pena por la de un delito menor. En cambio, aquí se buscará la verdad y, en consecuencia, la confesión será determinante, siempre y cuando sea corroborada por las pruebas de la parte contraria, ya que no alcanzará con la confesión simple. Por lo tanto, quedarán cubiertas la legalidad y la búsqueda de la verdad dentro de lo que establece el Código de Procedimientos. De esta manera, se solucionarían los problemas apuntados anteriormente.

Por último, antes de que se apruebe este dictamen de comisión, señalo que el presidente y el vicepresidente de la Comisión se reunieron con varios integrantes de los tribunales orales de la Capital Federal, quienes dieron el visto bueno para la sanción de esta iniciativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque del Partido Liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra para hacer mención a una razón elemental de técnica legislativa.

Es evidente que los órdenes del día 301 y 302 están íntimamente ligados entre sí, al extremo que en distintas exposiciones se han mezclado ambos asuntos. Precisamente, por esa razón y porque sé que finalmente ambos dictámenes van a ser aprobados, me preocupa el hecho de que se trate primero el orden del día 301 cuando, en realidad, deberíamos considerar antes el orden del día 302. Señalo esto porque si procediéramos como está previsto estaríamos legislando en el aire, a pesar de que ese vacío quedaría inmediatamente subsanado.

En la parte final del artículo 353 ter se dice que también podrá tramitar según las reglas del juicio abreviado, pero hasta que no se apruebe el orden del día 302 ese juicio abreviado no existe. Los únicos juicios que existen hasta este momento son los comunes: correccional, de acción privada, etcétera, pero no el abreviado.

De manera que habiéndose producido ya el debate en general sobre ambas cuestiones en cuanto al fondo del asunto, creo que sería más elegante —utilizo este término aunque quizás no sea el más adecuado— que tratemos primero

el orden del día 302 y, luego de sancionado éste, el 301. Esa es mi moción.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Quinzio.** — Señor presidente: quiero hacer la misma petición, es decir, que se trate en primer término el orden del día 302, anterior en el tiempo al 301, toda vez que éste va a incorporar en el caso de que se apruebe este proyecto el instituto que recoge el proyecto al que me he referido. Por eso pido que primero se vote y apruebe el orden del día 302.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente: contando seguramente con la autorización de mi bloque, ya que no estamos tratando ninguna cuestión dogmática, dejo constancia de que voy a acompañar con mi voto las disidencias efectuadas por el señor senador Villarroel.

**Sr. Presidente (Menem).** — Vamos a tratar de hacer un tratamiento reglamentario prolijo de este tema.

Está claro que hay acuerdo en que, lógicamente, primero hay que tratar el orden del día 302. Advierto que los señores senadores que han expuesto sobre el tema se han referido, en alguna medida a ambos órdenes del día: al 302 y al 301. Pero no hay ningún problema reglamentario en que hagamos un paréntesis con el orden del día 301. Es decir, para usar un término que se utiliza en política internacional, vamos a poner bajo un "paraguas" el tratamiento de dicho orden del día, y vamos a someter a consideración el 302, advirtiendo que el 301 ya ha sido fundamentado.

Entonces, si hay asentimiento, voy a someter a consideración el orden del día 302, dejando constancia de que está abierta la posibilidad de que los señores senadores formulen observaciones con respecto a dicho orden del día.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consecuencia, voy a someter a consideración el orden del día 302.

Pero previamente, debo someter a consideración la moción de orden formulada por el señor senador por Catamarca para que vuelva a comisión el tema en tratamiento.

Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda rechazada la moción.



## JUICIO ABREVIADO

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, está en consideración el orden del día 302: dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora al título II del libro III del Código Procesal Penal el juicio abreviado.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzei). — (*Lee*)

## Dictamen de comisión

## Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-90/96), incorporando al título II del libro III del Código Procesal Penal el juicio abreviado; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su sanción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de abril de 1997.

Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Agúndez.  
— Augusto Alasino. — Ernesto R. Oudín.  
— Cristina E. Fernández de Kirchner. —  
Angel F. Pardo. — Raúl A. Galván. —  
José Genoud.

En disidencia:

Pedro G. Villarroel.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados  
de la Nación

(23 de octubre de 1996)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Incorporase al título II del libro III del Código Procesal Penal el siguiente capítulo.

## CAPÍTULO IV

## Juicio abreviado

Artículo. 431 bis:

1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.

En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).

2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.

A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia.

3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 o 405, según corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a que se refiere el punto 2º, y no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.
6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes.
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior.



8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causas, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.

Art. 2º — Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las causas en trámite.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIENZI.  
Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.

#### ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el señor diputado Cafferata Norez.

#### DISIDENCIA TOTAL DEL SENADOR PEDRO GUILLERMO VILLARROEL

Señor presidente:

Sin perjuicio de reconocer la necesidad de buscar alternativas procesales que simplifiquen y modernicen la persecución penal, la modificación que propone el presente proyecto de ley resulta poco conveniente y abre serias dudas sobre las ventajas de su aplicación.

Constituye casi un lugar común señalar que en el modelo inquisitivo reformado que inspira el procedimiento establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, la etapa de instrucción o investigación adquiere una importancia determinante del resultado del juicio, hecho por el que se habla del "corrimento del peso del procedimiento hacia la instrucción". En este contexto, el juicio aparece como garantía última de control del desequilibrio de poder de la instrucción, debido a los rasgos inquisitivos que conserva dicha etapa. El carácter preponderantemente acusatorio del juicio ofrece una instancia —no exenta de dificultades— de moderación del posible desbalance de poderes que surja de la etapa investigativa. Vistas así las cosas, resulta inconveniente la simplificación del juicio, cuando en rigor los requerimientos de simplificación y de actuación por consenso de las partes deberían apuntar en nuestro sistema a los rasgos inquisitivos de la instrucción (cfr.: Binder, A., "Límites y posibilidades de la simplificación del proceso", en *Justicia penal y estado de derecho*, Buenos Aires (1993); Bovino, A., "Procedimiento abreviado", en *Temas de derecho procesal penal guatemalteco*, Guatemala (1996). El traslado de criterios inspirados en el procedimiento procesal penal estadounidense —donde no existe nada comparable con nuestra etapa formalizada de instrucción, y donde sí son comprensibles, aunque no siempre justificables en sus efectos, las exigencias de simplificación del juicio, dada la inmensa carga que requiere la realización de un debate oral, continuo y decidido por jurados— corre el

grave riesgo de perder de vista la diferencia fundamental del contexto al que se quieren aplicar aquellas soluciones. En el modelo que rige nuestro procedimiento, la persistencia de rasgos inquisitivos de la instrucción sumada a la simplificación del juicio supone el peligro de trasladar a la instrucción el peso de la decisión sobre el hecho punible, la responsabilidad del imputado y la pena aplicable, debilitando a su vez los rasgos que constituyen la garantía más importante de control de los actos de la instrucción durante el juicio, es decir, el carácter contradictorio, oral y público del debate, el principio de inmediación, la necesidad de producción íntegra de la prueba en esa etapa, etcétera.

La modificación propuesta importa además otro grave, peligro, señalado reiteradamente por autores críticos del *plea bargaining* estadounidense: la posibilidad de que la no aceptación de la propuesta del fiscal por parte del imputado y su defensor vaya acompañada de la amenaza de un pedido de condena más grave (cfr.: Langbein, J., *Torture and Plea Bargaining*, University of Chicago Law Review, v. 46 (1978)). De este modo, se pone en cuestión la supuesta "aceptación voluntaria" del imputado. Resulta aún más grave el hecho de que la efectiva realización del juicio común modifique sustancialmente su significado: el rechazo de la aplicación de un juicio abreviado y el reclamo de la realización de un juicio común corren el riesgo de ser "penalizados", en lugar de constituir una garantía de los derechos del acusado. El rechazo del acuerdo por parte del imputado lo coloca en situación especialmente desventajosa, ya que "impone" al ministerio público y al tribunal la carga de realización de un juicio pleno, mucho más trabajoso y exigente que las simples formalidades del juicio abreviado. No es ocioso señalar los peligros que acarrea una situación en la que el reclamo del ejercicio del derecho de ser juzgado con las debidas garantías supone una posición de partida desventajosa para el imputado.

Por estas razones, señor presidente, es que propongo el rechazo del proyecto de ley examinado.

Pedro G. Villarroel

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

96

#### INSTRUCCION SUMARIA EN EL CODIGO PROCESAL PENAL (CONTINUACION)

Sr. Presidente (Menem). — Ahora corresponde continuar con la consideración del Orden del Día N° 301.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Quinzio.** — Señor presidente: el instituto que estamos tratando en este momento tiende a dar mayor celeridad al procedimiento y a posibilitar un menor gasto de recursos por parte del Poder Judicial. Sustituye el procedimiento especial para los casos en que una persona haya sido sorprendida in fraganti delito de acción pública, a condición de que el juez estime prima facie que no corresponde la prisión preventiva del imputado. En tales supuestos, la instrucción estará a cargo del fiscal y no podrá exceder el término de quince días.

En varias oportunidades se ha cuestionado la delegación de facultades instructorias al representante del Ministerio Público, por lo que es bueno señalar que el proyecto contempla la posibilidad de que el imputado solicite al juez ser oído en la declaración indagatoria, en cuyo caso la instrucción se registrará por las normas comunes y el juicio tramitará, según corresponda, incluso conforme las reglas del juicio abreviado, que hemos acabado de aprobar.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: insisto en mi disidencia parcial. Vale decir, mantengo mi propuesta de supresión al final de la norma proyectada de la frase que dice que "También podrá tramitar según las reglas del juicio abreviado".

Lo único que quiero agregar es que cuando he dicho que no se trata de juicio abreviado sino de procedimiento abreviado he querido marcar, y tal vez no he puesto el énfasis suficiente, que se produce una sentencia condenatoria sobre la base de prueba de la instrucción y de la llamada admisión por parte del imputado, lo que no es de ninguna manera un juicio. La instrucción es un resabio, todos lo sabemos y por ello nuestro sistema penal se llama mixto, del sistema inquisitivo. Vale decir, una herencia del poder absoluto. La instrucción no es juicio, es un procedimiento donde las posibilidades de defensa están sumamente restringidas y, por ende, menoscabadas las garantías de la Constitución que exigen juicio previo a una condena.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

97

## TRABAJOS DE REPARACION EN RUTAS NACIONALES

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca de los aspectos técnicos y económico-financieros de los llamados a licitación para trabajos de reparación en rutas nacionales (Orden del Día N° 303).

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — (*Lee*)

### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Obras Públicas y de Transportes han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Oljeda del Valle Rivas, solicitando informes sobre los aspectos técnicos y económico-financieros de los llamados a licitación para trabajos de reparación en rutas nacionales; y os aconsejan su aprobación.

De acuerdo al artículo 120 del reglamento del Honorable Senado el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 19 de marzo de 1997.

*Carlos A. Reutemann. — José M. de la Sota. — Alberto R. Maglietti. — Daniel Baum. — Deolindo F. Bittel. — José A. Romero Feris. — Pedro C. Maranguello. — Luis A. León. — Julio C. Humada. — Humberto E. Salum. — José L. Gloja. — Juan R. Aguirre Lanari. — Juan I. Melgarejo.*

### Proyecto de comunicación

*El Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe sobre los aspectos técnicos y económico-financieros de los llamados a licitación en curso o próximos a iniciarse, para trabajos de pavimento en rutas nacionales, especificando:

a) Alternativas que se analizan, y los criterios que sustentan la naturaleza de las obras por las que se opta: tratamiento superficial bituminoso, carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico, etcétera;

b) Modos en que el Estado efectuará el control de calidad de los trabajos.

*Oljeda del Valle Rivas.*